

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Comunicado de prensa

EMBARGADO HASTA LAS 00:01 HORAS GMT DEL 13 DE JULIO DE 2010

Índice AI: PRE 01/226/2010

TÚNEZ DEBE PONER FIN A SU ACTIVIDAD DESESTABILIZADORA CONTRA GRUPOS CRÍTICOS CON LAS AUTORIDADES

Las autoridades tunecinas deben abandonar sus prácticas desestabilizadoras contra organizaciones de derechos humanos y grupos disidentes de infiltrarse en ellos y provocar disturbios, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.

El informe de Amnistía Internacional, *Independent Voices Stifled in Tunisia*, documenta los problemas a los que se enfrenta diariamente la población tunecina que se atreve a criticar a las autoridades, incluidas infiltraciones en grupos de derechos humanos y acoso de activistas concretos.

“El trastorno que las autoridades tunecinas están causando a las organizaciones de derechos humanos y el hecho de que tantas organizaciones independientes sean víctimas en estos momentos de maniobras golpistas orquestadas por simpatizantes del gobierno señalan un patrón de actuación que no podemos pasar por alto” afirmó Hassiba Hadj Saharaoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África—. El cinismo de estas maniobras de las autoridades tunecinas debe ser rotundamente condenado.”

La Liga Tunecina por la Defensa de los Derechos Humanos sufre presiones internas constantes desde que en 1992 fue obligada legalmente a permitir la libre afiliación a su organización, lo que permitió que simpatizantes del gobierno entraran a formar parte de su membresía y socavaran la importante labor de la organización en materia de derechos humanos.

Estallaron disputas legales entre la junta directiva y los miembros afines a las autoridades y al partido gobernante en relación con asuntos que incluían el cierre de oficinas regionales, lo que dio lugar al estancamiento y a la suspensión en la práctica de las actividades de la Liga Tunecina.

Otro ejemplo es el de la Asociación de Magistrados Tunecinos (*Association des Magistrates Tunisiens*, AMT), dirigida en la práctica por personas afines al gobierno que se hicieron con el mando después de que el equipo directivo anterior experimentara una serie de roces con las autoridades en relación con la independencia judicial.

En agosto de 2009, la dirección independiente del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (*Syndicat national des journalistes tunisiens*, SNJT) fue derrocada por simpatizantes del gobierno al negarse a apoyar la candidatura de Ben Alí en el periodo anterior a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2009.

Un congreso especial eligió una nueva junta, que no tardó en expresar su apoyo a la candidatura de Ben Alí a la presidencia de Túnez.

“Estas tácticas de sabotaje parecen contar con la aprobación de las máximas autoridades de Túnez. A los activistas de derechos humanos y a quienes discrepan se los acusa de ser antipatrióticos y de renunciar al honor de pertenecer a Túnez antes de someterlos a acoso e intimidación” afirmó Hassiba Hadj Saharaoui.

Por otra parte, las autoridades tunecinas han bloqueado el registro oficial de grupos de oposición y organizaciones de derechos humanos, condenándolas a la indefinición jurídica durante largos periodos, lo que les ha impedido reunirse y actuar legalmente con arreglo al derecho tunecino.

En junio de 2010 se modificó el Código Penal del país para acallar las críticas desde el extranjero sobre el historial de Túnez en materia de derechos humanos, penalizando los actos de personas que contactaran con organismos extranjeros en pos de objetivos que se consideraran dañinos para la 'seguridad económica' de Túnez.

La medida se vio como un intento de amordazar a los activistas tunecinos que trabajan para que los socios internacionales de Túnez conozcan el historial de este país en materia de derechos humanos al plantearse sus relaciones comerciales con ese país.

"Apoyándose en el vergonzoso silencio de sus socios internacionales, las autoridades tunecinas ahora pretenden silenciar también las críticas del exterior" afirmó Hassiba Hadj Saharaoui.

También se suceden los actos de hostigamiento contra activistas de derechos humanos individuales en Túnez sin que las denuncias se investiguen debidamente o lleguen a investigarse siquiera.

Agentes de seguridad vigilan a los activistas de derechos humanos en casa y en el trabajo, los siguen a las citas del médico e incluso a funerales. Amnistía Internacional ha documentado todo un catálogo de incidentes, desde agresiones físicas hasta enjuiciamientos de activistas basados en cargos falsos.

Ali Ben Salem, de 78 años, es objeto de continuos actos de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades tunecinas por expresar desde hace tiempo sus críticas sobre el historial de Túnez en materia de derechos humanos. Es miembro fundador tanto de la Asociación de Lucha contra la Tortura en Túnez como del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez, y consiguió presentar una denuncia contra las autoridades tunecinas ante la ONU en noviembre de 2007.

Su estado de salud es delicado, tiene problemas cardíacos y sigue padeciendo secuelas de la tortura que le infligieron en el año 2000, cuando lo detuvieron, golpearon, rociaron con gas lacrimógeno y abandonaron medio muerto en una obra cerca de Túnez.

Ahora no puede costearse el tratamiento médico que necesita porque las autoridades han bloqueado su pensión de jubilación como funcionario público.

El gobierno de Túnez ha contratado recientemente los servicios de una empresa de relaciones públicas estadounidense y ha puesto en marcha una campaña para contrarrestar su imagen de autor de abusos contra los derechos humanos y retratar a Libia como país favorable a la inversión extranjera.

"En lugar de desperdiciar tanto tiempo, dinero y esfuerzo para manipular su imagen, las autoridades tunecinas deberían dedicar esos recursos a abordar eficazmente los muchos abusos contra los derechos humanos que se cometen en el país –afirmó Hassiba Hadj Saharaoui–. Los socios internacionales de Túnez deben abrir los ojos y darse cuenta de que el espacio para los derechos humanos en Túnez se está reduciendo a toda velocidad."